

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 019 2016 01139 01, promovido por el señor **LUIS FERNANDO GIRALDO CAÑAS** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** y la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de Colpensiones frente a la sentencia emitida el 6 de diciembre de 2018 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, y revisar en consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **015 de 2023**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Luis Fernando Giraldo Cañas, demandó a Colpensiones, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez pretendiendo se declare la nulidad de los dictámenes médicos emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y en consecuencia se declare que padece una pérdida de capacidad laboral superior al 50% sustentada en su historia clínica, conforme dictamen proferido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: pensión de invalidez de origen común desde el 22 de diciembre de 2015, intereses moratorios o en subsidio indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que padece “*Fibromialgia, hipertensión arterial crónica, vitíligo, neuritis herpética dermatoma C5 izquierdo, trastorno depresivo, tenosinovitis bicipital e hipoacusia neurosensorial*”. La pérdida de su capacidad laboral de origen común fue calificada en diversas fechas y por las siguientes entidades: el 5 de septiembre de 2014, por Colpensiones con un porcentaje del 38.92%, y el 30 de enero y en febrero de 2015 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respectivamente, en un 38.97%, estructurada el 22 de mayo de 2014 según las tres entidades. Aduce que a raíz del deterioro progresivo generado por las enfermedades que sufre, fue evaluado por la Facultad Nacional de Salud

Pública de la Universidad de Antioquia con un porcentaje del 50.11%, con fecha de estructuración del 22 de diciembre de 2015. Agrega que agotó la reclamación administrativa.

En sentencia proferida el 6 de diciembre de 2018, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a reconocer y pagar al señor Luis Fernando Giraldo Cañas: la pensión de invalidez de origen común, a partir del 22 de diciembre de 2015, sobre 13 mesadas anuales; la suma de \$28.121.445 por concepto de retroactivo pensional causado hasta el 30 de noviembre de 2018 y costas del proceso, y absolvió de las demás pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de Colpensiones, inconforme con la decisión de primera instancia precisó. Primero, que el dictamen emitido por su representada guarda total validez y no es viable imputarse ningún yerro, pues aparte de que fue expedido por una entidad competente conforme a la normatividad vigente y al manual único de calificación, esto es, el Decreto 917 de 1997; en dicho experticio se valoró la historia clínica aportada por el actor al momento de la calificación, se tuvo en cuenta además, imágenes diagnósticas, exámenes paraclínicos, ocupacionales, conceptos de salud ocupacional y la valoración física realizada el día de la consulta. Segundo, que las juntas de calificación ratificaron la decisión de otorgarle al accionante un porcentaje del 38.92%, con fecha de estructuración del 22 de mayo 2014. Tercero, que resulta improbable que en la actualidad el estado invalidez del demandante haya avanzado de tal forma que se le catalogue como inválido, y que contrario a lo manifestado por la parte actora cuando aduce que Colpensiones y las juntas de calificación no tuvieron en cuenta las patologías: fibromialgia, hipertensión arterial crónica y tenosinovitis bicipital, ya que revisados los dictámenes, especialmente, el de la Junta Regional, allí se le otorga un trastorno somatoformo del dolor fibromialgia en un porcentaje del 20%, hipertensión arterial del 7.14%, y tenosinovitis bicipital del 1%. Cuarto, que en el dictamen allegado con la demanda, la perito indicó que el porcentaje aumentó

debido a un documento obrante en la historia clínica fechado de 2015, mismo que se expidió con posterioridad a las calificaciones emitidas por las codemandadas, precisando que la fecha de estructuración cambia, para el 22 de diciembre de 2015, pues figuran unas patologías nuevas como la neuritis herpética, enfermedades de tal magnitud que permiten que exista un aumento del 11.18%, sin embargo, solo fueron presentes en diciembre de 2015, y quinto, que, en razón de lo anterior, el actor debe adelantar un proceso administrativo, donde se evalúen e incorporen las patologías nuevas, en la medida que es sabido que, en asuntos de pensiones de invalidez, la jurisprudencia ha establecido que la norma aplicable es la vigente al momento en que se estructura tal estado, por lo que en el caso del asegurado, es la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, que exige un porcentaje del 50% o más de pérdida de capacidad laboral, proporción que conforme el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no colma el afiliado para acceder a la prestación económica deprecada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones en escrito de alegatos de conclusión precisó que el demandante realizó el correspondiente conducto regular para efectos de calificar su pérdida de capacidad laboral, proceso que culminó con el recurso de apelación decidido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 22 de mayo de 2014, instancia en la cual se estableció un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 38.97%. Teniendo en cuenta que el dictamen que se encuentra en firme es el emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 22 de mayo de 2014, instancia en la cual se estableció un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 38.97%, se concluye que el citado no se considera una persona inválida, siendo improcedente el reconocimiento pensional solicitado.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si es procedente dejar sin efectos el dictamen médico expedido por Colpensiones, Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Junta Nacional de Calificación de

Invalidez y acoger el expedido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; en consecuencia, si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de pensión de invalidez de origen común, y al retroactivo pensional.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por los artículos 52 de la Ley 962 de 2002 y 142 del Decreto 019 de 2012, el estado de invalidez se determina con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación, y corresponde al Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, hoy Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, a las Compañías de Seguros que asumen los riesgos de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar inicialmente la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias, pero cuando el interesado no está de acuerdo y manifiesta su inconformidad, la entidad debe remitirlo a la Junta de Calificación de Invalidez del orden regional para que dirima la discrepancia. La decisión de ésta es apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y contra ellas proceden las acciones legales.

Preliminarmente ha de indicarse, que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia tiene definido que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las entidades mencionadas no son medios probatorios solemnes, y por ende el Juzgador en su valoración no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad o lo persuadan más, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Adicionalmente ha referido que como tales dictámenes no obligan al Juez, dentro del marco de esa libertad probatoria, éste puede acudir a otros medios idóneos para establecer la fecha de estructuración de la invalidez, porque no en todos los casos ésta puede inferirse con certeza (sentencias SL 16.374 de 4 de

noviembre de 2015, Radicado 53.986; SL 2496 de 2018; SL 697 de 2019; y SL 3117 de 5 de agosto de 2019, Radicado 73.341).

De manera inicial el demandante fue valorado por Colpensiones, quien para el 5 de septiembre del año 2014, folio 12 a 14, consideró que el actor contaba con una pérdida de capacidad laboral del 38.92% estructurada el 22 de mayo del año 2014 y fundamentada en las siguientes deficiencias:

- Vitiligo (capítulo 10 tabla 10.1) 2.4
- HTA (capítulo 7 tabla 7.2) 7.4
- Dolor Somatomorfo (capítulo 12 tabla 12.4.7) 20
- STC (capítulo 2 tabla 2.7) 3
- HNS (capítulo 13 tabla 13.7) 0.25

En dicha calificación se dejó constancia de lo siguiente: “ Paciente ingresa con sus propios medios con buena presentación personal y en buenas condiciones generales aparentes. Alerta, consciente orientado en sus tres esferas, Responde preguntas y obedece las órdenes del evaluador”

Posteriormente, la junta Regional de Calificación de invalidez, con el fin de desatar controversia ante los recursos interpuestos por la parte actora en contra de la valoración realizada por Colpensiones, efectuó valoración a la demandante encontrando que era pertinente incrementar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor en 38.97%, estructurada el 22 de mayo de 2014 basándose en las siguientes deficiencias:

- Trastorno del dolor somatomorfo (tabla 12.4.7 y 12.4.5)20
- HTA (tabla 7.2) 7.40
- Patología de la piel (tabla 10.1) 2.40
- HNS (tabla 13.7) 0.25
- Dolor en hombro izquierdo (tabla 2.6; 2.9) 1.0
-

Para la junta Regional de calificación no fue relevante el diagnóstico de túnel del capo, por el contrario, generó mayor dificultad el dolor en el hombro izquierdo.

Finalmente, en sede de apelación, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para el 25 de septiembre del año 2015, en donde puede verse:

“Ingresa solo al consultorio, camina solo independiente, con Buen estado general múltiples puntos dolorosos en región cervical..... arcos de movilidad articular de hombros bilateralmente limitados en forma leve, fuerza conservada, vitiligo en manos , pies testigulos...Arcos de movilidad articular de rodillas y tobillos completos dolorosos, hay roce patelar bilateral en rodillas...” ... “no es procedente AUMENTAR la Perdida de Capacidad Laboral como se solicita en el recurso de apelación teniendo en cuenta que las deficiencias calificadas están en concordancia con la Historia Clínica documentada...”

Con la demanda fue allegado dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido el 10 de marzo de 2016 por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con un 50.11% de pérdida de capacidad laboral, estructurada el 22 de diciembre de 2015 y donde concluyó como deficiencias las siguientes:

- Trastorno de dolor persistente Somatomorfo (tabla 12.4.5 y 12.4.7) 20
- Neuritis Herpética Dermatoma C5 izquierdo (tabla 2.2) 15
- Trastorno depresivo (tabla 12.4.5) 10
- HA (tabla 7.2) 7.4
- Dolor en articulación, hombro (tabla 1.19 y 1.49)2.5
- Vitiligo (tabla 10.1) 2.4
- Hipoacusia Neurosensorial (tabla 13.7) 0.25

En audiencia de ratificación de dictamen, la doctora Gloria Isabel López Jaramillo, médica especialista en salud ocupacional, integrante del grupo de calificadores de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Área de Salud Ocupacional, señaló que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del accionante incrementó en el dictamen por ella emitido

debido a la evolución en el tiempo, al ser una valoración posterior el paciente puede tener progresión de la enfermedad que varié la condición médica al momento de la evaluación, pues argumentó que el historial allegado al momento de la consulta, el actor presentaba unos diagnósticos que en el momento de las calificaciones previas no habían sido valoradas pues no se presentaban para dicho momento, específicamente se refería a la neuritis herpética y a otros dolores de tipo somático a nivel de hombros y rodillas, que no los padecía anteriormente, considerando que esas patologías aumentan el grado de deficiencia, y por ello, resulta diferente el porcentaje. Que la valoración de la neuritis herpética está referenciada en el historial por el médico tratante Clínica del Dolor donde se indica que el paciente tiene una neuritis herpética dermatoma C5, valoración donde se perciben alteraciones de la sensibilidad en el territorio de este nervio, son calificables en el Decreto 917 y le asigna un porcentaje del 15%. Que lo que son las evaluaciones de los otros tipos de dolor, el manual como tal no tiene referencia a una tabla del dolor, pero el manual permite hacer homologaciones, por lo que fue asociado el dolor somatomorfo que finalmente es el dolor que mayor representación y limitaciones está en el paciente. Que los dolores que son de tipo somático no tienen una representación en una tabla específica como si la trae el nuevo manual. Que el manual permite la homologación de cualquier diagnóstico que no se encuentre especificado que se asemeje respecto de los síntomas o los hallazgos. Que el dolor somático es aquel dolor que se refiere a un hallazgo o aun trastorno orgánico específico, en tanto el somatomorfo refiere a únicamente al dolor donde no se haya un órgano específico comprometido, solamente está el síntoma aparente, pero al no haber otra tabla que pueda homologar el dolor, se homologó de la forma explicada, donde el manual hace referencia al dolor. Reitera que para incrementar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral se tuvieron en cuenta los nuevos diagnósticos que presentó el paciente al momento de la calificación, de los cuales los que más le aportan valor son: el dolor somático a nivel de rodilla y articulaciones del hombro, y la neuritis herpética que en las calificaciones previas no fueron diagnosticados, pues la patología neuritis herpética fue referenciada en septiembre de 2015.

La Juzgadora de primera instancia, precisó que el dictamen proferido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia fue decretado y practicado en este juicio conforme las normas previstas para tal fin, el cual determinó que el actor presenta una pérdida de capacidad laboral de origen común superior al 50%, acogéndolo en su totalidad y le imprime plena validez para efectos de resolver el derecho pensional deprecado, pues se demostró la experiencia del perito, la idoneidad, se expuso además el método utilizado, fue aplicado el Decreto 917 de 1999, explicó por qué se incrementó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral respecto al fijado por las juntas de calificación, indicando que en su dictamen se están valorando nuevos diagnósticos surgidos con posterioridad a dichas evaluaciones, que dan lugar a un incremento en el porcentaje.

No pude dejarse por alto que la valoración realizada por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, fue elaborada el 10 de marzo de 2016 esto es, tan sólo 5 meses y 14 días después, de la revisión hecha al demandante por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en donde no se tuvo en cuenta el diagnóstico Neuritis Herpética Dermatoma C5 izquierdo, por no encontrarse soportado en la historia clínica del paciente.

No está de más recordar, el artículo 164 del Código General del Proceso donde se establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y el artículo 167 ibidem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

A su letra, el decreto 917 de 1999, indica:

Artículo 9º. Instrucciones generales para los calificadores.

El "Manual único para la calificación de la invalidez" establece con base en los criterios y componentes definidos en los artículos anteriores, un método uniforme, de uso obligatorio para la determinación legal de la pérdida de la capacidad laboral que presenta un individuo al momento de su evaluación.

La calificación de la pérdida de capacidad laboral del individuo deberá realizarse una vez se conozca el diagnóstico definitivo de la patología, se termine el tratamiento y se hayan realizado los procesos de rehabilitación integral, o cuando aun sin terminar los mismos, exista un concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría.

.....

a) Para las deficiencias: El grado de deficiencia a que se refiere el Libro Primero y que se relaciona con los sistemas orgánicos, se expresa en porcentajes de pérdida funcional(deficiencia global). Para facilitar el ejercicio del calificador o de las Juntas Calificadoras, contiene una serie de tablas de valores por órganos o sistemas, de las cuales se pueden sustraer los valores correspondientes a este componente.

En atención a lo establecido por el artículo transcrito, la deficiencia debe tenerse en cuenta sólo cuando se encuentra debidamente documentada en la historia clínica del paciente, se tenga el diagnóstico definitivo y se determine el tratamiento, transcurriendo un concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría, concepto que, contrario a lo indicado por la doctora Gloria Isabel López Jaramillo no existe en el presente caso.

Allegado a la foliatura reposa la historia clínica del paciente, toda ella, data de fecha anterior al mes de octubre del año 2014 en la cual, no puede determinarse en parte alguna concepto desfavorable de recuperación respecto a Neuritis Herpética Dermatoma C5. Sumado a ello, la tabla utilizada para tal calificación, correspondiente a TABLA No.2.2 DEFICIENCIA DEL PLEXO BRAQUIAL UNILATERAL, no representa deficiencia alguna narrada en la historia clínica aportada en la demanda, y por ende, no puede considerarse como determinante a razón de la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Sumado a ello, en la calificación en comento se tiene como fecha de estructuración el 22 de diciembre del año 2015, fecha que no tiene soporte alguno en la historia evolutiva del paciente, dejando por alto, el Decreto 917 de 1999 que indica:

Artículo 3°.

Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda

diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.

Ahora, hay que tener en cuenta que la valoración efectuada y arrimada al proceso es un simple medio probatorio, tal y como la Sala Laboral lo ha expuesto en sentencia SL3992-2019 reiterada en SL509-2022 en donde expresó:

“Sin embargo, al mismo tiempo, por la diversidad de factores que confluyen a la determinación de la realidad de la salud del paciente y la evolución de su capacidad laboral, la Sala ha determinado que dichos dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba de carácter ad substantiam actus. Contrario a ello, ha destacado esta corporación, en múltiples oportunidades, que dichas experticias constituyen una prueba más del proceso que el Juez puede valorar de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre formación del convencimiento. (Ver CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-2019 y CSJ SL3380-2019).

En dicha medida, no es cierto que, como lo reivindica la censura, la calificación del estado de invalidez constituya una cuestión técnica ajena al conocimiento de los jueces, pues, por el contrario, es precisamente el Juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Para esos fines, a su vez, el Juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones.

Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el Juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria.”

El diagnóstico efectuado por la Facultad de Salud Pública de la universidad de Antioquia, contiene narrados apartes médicos POSTERIORES a la fecha de realización de la valoración por parte de Colpensiones, Junta Regional y Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por lo cual, de manera obvia, dichas

entidades no las pudieron tener en cuenta al momento de revisar el estado de salud del señor Giraldo Cañas.

Así entonces, la valoración efectuada por Colpensiones, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez si guardan consonancia con la historia clínica que para el momento de cada una de las revisiones tenía el demandante de acuerdo a lo aportado en el proceso.

Es imperativo que, se recuerde el criterio que recientemente expuso la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL 2349 de 2021:

“Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción.

Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala asentó:

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica - decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, según el caso (...). Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697- 2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019).

En esa medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona”.

No se encuentra esta sala veracidad y respaldo en las afirmaciones dadas en el dictamen de pérdida de capacidad realizado por Facultad Nacional de Salud Pública, pues se insiste, no está soportado en la historia clínica del paciente que se conoce en el proceso, ni tampoco, corresponde a la evolución de la enfermedad

Es por ello, que, considera la Sala, que no es procedente la nulidad de las valoraciones médicas realizadas por Colpensiones, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y desestima la valoración médica realizada por la Facultad Nacional de Salud Pública, por no estar correlacionada con el restante material probatorio

Ante lo anterior, es preciso decir, que el demandante no puede considerarse una persona inválida, entendiendo este término de la manera descrita por la Corte Constitucional en sentencia C-458 de 2015, pues no cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% , y por tanto, no reúne el requisito *sine qua non* para acceder a la pensión de invalidez.

Así las cosas, revocará la decisión que se revisa en apelación y consulta, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el día seis (6) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018)

SEGUNDO: Absolver a Colpensiones de todas las pretensiones formuladas por el señor Luis Fernando Giraldo Cañas.

TERCERO: Las costas en primera instancia corren en favor de las accionadas y a cargo del demandante, en esta instancia sin costas.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e858093da4e9dbb7811f07cfd36764a7bc6e2dc9ec941532efc0b438f87d0efb**

Documento generado en 02/02/2023 03:28:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>